

# El mapa de los extranjeros en Córdoba



LA VOZ

<http://www.lavoz.com.ar/politica/hay-unos-150-mil-migrantes-de-sudamerica-viviendo-en-cordoba>

## **LAS DEFENSORIAS DEL PUEBLO LOCALES COMO PROTECTORAS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.-**

El fenómeno migratorio mundial ha tenido en la actualidad un crecimiento exponencial que es difícil de dimensionar ascendiendo a mil millones de personas. Las causas que fomentan las mismas son diversas y muy difíciles de determinar debido a la dimensión de las migraciones irregulares cuyos datos cuantitativos son difíciles de obtener. Sin embargo, entre ellas se encuentran el cambio climático, las catástrofes naturales y las provocadas por el hombre, los conflictos militares internacionales, trances políticos, crisis socioeconómicas, el envejecimiento de la población en los países industrializados, el crecimiento exponencial del desempleo entre los jóvenes en los países en desarrollo y de las desigualdades socioeconómicas entre el Norte y el Sur.

En la presente intentare hablar de como el marco normativo Nacional e Internacional de protección a los migrantes, tiene un espacio de aplicación en las ciudades y las comunidades locales, y como desde allí de debe brindar protección a estos grupos de atención primaria. Es en base a estas normas y ámbitos de discusión que son macro-globales y que parecen inalcanzables a las instituciones y gobiernos locales que debemos aplicar con la mayor calidad de atención en defensa de los Derechos de los Migrantes para lograr la integración de los grupos vulnerables en la ciudad, porque ese el fin último de esta normativa protectoria aplicable. Los procesos y tendencias mundiales tienden a encaminarse para la comprensión de una migración como un fenómeno global, urbano e intercultural, además de encontrarse en sintonía con los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) pactados en la agenda 2030, donde se indica la importancia de disminuir las desigualdades mediante programas que apoyen a los grupos más desfavorecidos de la sociedad, como lo son los migrantes.

El fin de tal mandato es que el migrante en condiciones de vulnerabilidad se integre a la sociedad de una ciudad, y es precisamente a este proceso donde debemos apuntar las instituciones, a mejorar el recibimiento que hacen nuestras ciudades de las poblaciones que por las razones expuestas se ven necesitados de migrar, allí se harán efectivos servicios de salud, educación, desarrollo humano, laboral, etc.

Toda esta exposición no escapa al problema del camino del migrante en el ingreso a un país, no estamos hablando de aislarlo a los casos donde las complicaciones se presentan durante la movilidad, por ejemplo, obtención de residencias, documentación, pasaportes, cartas de ciudadanía, condición de ciudadano, sino que lo trascendental es como las ciudades donde será acogido el migrante se prepara –o no- para ello. El desafío es ser centros de acogida de esa población que por necesidad ha debido mudar su centro de vida y tratar de brindarle las condiciones necesarias para poder propender a su desarrollo humano.

Es importante entender que la ciudad es un elemento central en la reorientación del multiculturalismo y la integración de los migrantes en la sociedad desde un enfoque más

inclusivo. Considerando este nuevo enfoque de trabajo donde se busca gestionar la migración desde la ciudad con el fin de buscar nuevas formas de gestionarla con distintos actores gubernamentales y locales.

Este proceso, que comenzó en Chile a través de la Organización Internacional de Migrantes con el programa *“Los Migrantes y Las Ciudades”* debe ser fomentado en países como Argentina, donde hoy vivimos un proceso de retracción de derechos que afecta claramente a los mas vulnerables, como quita de pensiones a personas con discapacidad, eliminación de los subsidios al consumo energético colocando el gas y la energía eléctrica en un valor “impagable”, los programas de salud para ancianos se ven desbordados, como la salud publica en general. Proceso que afecta a aquellos defensores y defensoras de los Derechos Humanos ligados a cuestiones de Genero, ambiente o comunidad LGTBI, sumiéndolos en la invizibilización discursiva.

Es por ello que la apuesta esta dada en nuestra organización política constitucional que fomenta los gobiernos e instituciones locales de las Ciudades, dando preeminencia a éstas y donde la mayoría de los servicios para paliar las dificultades de la desigualdad sociales son prestados en ese contexto, por estos gobiernos, sustituyendo la falta de políticas publicas nacionales. El esfuerzo se realiza a través de la la relación de alianzas como por ejemplo la Asociación de Defensorías del Pueblo de la Republica Argentina e inclusive a través de consorcios o foros regionales de defensores, con la finalidad de replicar buenas prácticas, incorporar la migración a la planificación local, implementar políticas públicas locales migratorias, forma parte de los medios de abordaje necesarios e imprescindibles de la gobernanza migratoria que alienta la O.I.M dentro del programa.

Esto ayuda para que las capacidades instaladas de los gobiernos locales –de las ciudades– es poco utilizada y no es eficiente en la gestión de la migración, lo que pone a las Defensorías del Pueblo locales en el rol de facilitador y articulador de los distintos procesos que, de una comuna a otra, se vuelven más interesantes por los contextos políticos, sociales e institucionales de las mismas, en este marco en Río Cuarto comenzamos con el Observatorio Regional de Migrantes, que tiende a incorporar municipios y ciudades para generar fuertes alianzas, en el marco de los ODS y trabajar como en Chile en con la Agenda 2030, particularmente trabajando en los siguientes objetivos: 1) erradicar la pobreza, 3) salud y bienestar, 4) educación de calidad, 5) igualdad de género, 8) trabajo decente y crecimiento económico, 10) reducción de las desigualdades, 11) ciudades y comunidades sostenibles, 13) acción por el clima y 16) paz, justicia e instituciones sólidas.

Este nuevo rol de los gobiernos locales que debe promoverse, debe expresarse bajo los siguientes principios:

- 1) La buena gobernanza de la migración requiere que un Estado se adhiera a las normas internacionales, acate, respete y reconozca los derechos de los migrantes;
- 2) Un Estado debe formular políticas migratorias y conexas contrastadas y utilizar enfoques de gobierno integrados y,

3) Un Estado no puede gobernar la migración por sí solo; necesita concertar solidas asociaciones.

Existe el mandato de promover ciudades inclusivas, seguras y resilientes, instalando capacidades y políticas sociales que promuevan el encuentro y la equidad social. Generar programas de inclusión para adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, inclusión en la educación, tomar al inmigrante como parte de nuestra sociedad. Está instalada la capacidad de las ciudades para realizar las políticas necesarias en tal sentido, sin embargo es una herramienta poco utilizada y es hacia allí donde deben encaminarse las instituciones a propender a dar la batalla para que explotar al máximo dichas capacidades. Debemos ser medios de abordaje necesarios de la gobernanza migratoria, nuestras ciudades tienen que invitar a los migrantes a ser parte de ellas para comprometerse en el resguardo de los derechos que poseen.

A los fines de lograr, teniendo en consideración esta situación y en base a las experiencias locales de Argentina, es menester hacer referencia a tres casos donde la intervención de instituciones locales han demostrado una clara defensa de los Derechos Fundamentales y Humanos, superando las vulnerabilidades a las que se ven sometidos los grupos de atención primaria de migrantes. La particularidad de dichos casos es la intervención de las instituciones superando las falsas imposiciones que pretenden imponerse burocrática y legalmente. Dando un paso, no se trata de casos aislados sino de ejemplos claros de cómo cuando se trabaja de manera articulada y con conocimientos los resultados se logran, sin duda la deuda esta en la carencia de políticas publicas y en función de ello a la ausencia de reglas claras, políticas publicas que deben contener una mirada hacia las poblaciones migrantes vulnerables y su forma de inclusión sostenida en la sociedades ...

**Resolución Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 1369/16, dictada en el marco del trámite N° 511/16.**

Una mujer trabajadora migrante y madre de tres niñas, de nacionalidad dominicana, llegó a la República Argentina en el año 2008 y obtuvo el mismo año una residencia permanente a la luz del art. 22 de la Ley N° 25.871. En el año 2011 ingresó al país su hija menor de edad y en el año 2014 interpuso una solicitud de ingreso de sus otras dos hijas menores de edad, para obtener el ingreso de sus hijas acompañó a la Dirección Nacional de Migraciones su DNI y las constancias que acreditaban el vínculo familiar con sus hijas así como los ingresos económicos que permitirían solventar su manutención; a saber, la venta de indumentaria en el local comercial. Sin embargo la DNM la interrogó sobre la procedencia de la documentación presentada y la veracidad de la misma como así también, sobre la existencia real de vínculo que la misma acreditaba con las menores, su situación laboral pretendiendo insinuar que se dedicaba a la prostitución e incluso cuestionando el vínculo matrimonial concretado en nuestro país. Remarca que en dichas actuaciones luego de los interrogantes no se respetaron sus derechos, no se le leyó el acta que se la labró ni las actuaciones –ella no sabe leer- y se la amenazo con dar por concluido el expediente con la solicitud

efectuado. En este marco, la migrante dominicana se dirige a La Defensoría de la CABA quien toma conocimiento del caso y la asiste jurídica y administrativamente en el procedimiento ante la DNM, en el que detecta serías anomalías y violaciones a derechos. A punto tal que habían emitido la expulsión del país de la misma.

En dicho contexto la DPCABA, dicta una Resolución, en la que exhorta la DNM a contemplar los derechos de los Niños, niñas y adolescentes quienes se estaban viendo vulnerados por imposiciones absurdas y de carácter burocrático, asumiendo el rol de defensor de los derechos de la niñez y el interés superior del niño analizando el derecho de la menor que había desarrollado su vida natural en Argentina, la prioridad de la reunificación familiar de los migrantes y la defensa de la mujer en el marco de las políticas de género que pretendían inmiscuirse en un marco de intimidad de la vida intra familiar. Debe considerarse que la falta de contemplación de tales características para otorgar la residencia a las menores, genera responsabilidad del Estado en el marco Internacional, resolución que fue elevada para su acogimiento al Ministerio de del Interior, Obras Públicas y Vivienda. **Isma fíjate que en los informes dice que no tuvieron respuesta aun.**

#### **Defensoria San Salvador de Jujuy - Ajalla Julio Cesar sobre la Atención Hospitalaria de su madre Apolinaria Cruz Azua.**

El hijo de la Sra. Apolinaria Cruz, inicia una petición ante el Defensor del Pueblo de Jujuy en virtud de que su madre de nacionalidad boliviana vió negada su atención a la salud en el Hospital Pablo Soria de la ciudad de San Salvador de Jujuy, por no poseer documentación oficial –documento de identidad- y contar solo con un documento que acredita su nacimiento en el vecino país de Bolivia. Manifiesta que el estado delicado de salud por presuntamente afección de cáncer amerita un estudio pormenorizado de la salud, pero que se ha negado la atención por su condición de migrante sin documentación nacional.

Gestionando ante el consulado Boliviano y ante el propio Hospital Pablo Soria, el Defensor del Pueblo de Jujuy exhorta al primero a acelerar los trámites para la documentación nacional –del Estado Plurinacional de Bolivia- e íntima al segundo a que se le brinde prestaciones médicas asistenciales a la Sra. Apolinaria Cruz Azua, todo ello en el marco del derecho humano de la Salud, derecho con consagración constitucional, apoyan a demás la tesis en lo establecido en el art. 8 de la ley 25.871 que establece que no puede negarse las prestaciones de salud al migrante sin importar su situación migratoria. Lo más loable, es como una institución local se sobrepuso a los devenires burocráticos que son ilegales y colocan en una situación de aun más vulnerable a los migrantes.

La particularidad del caso, es que a partir de éste se presentó en el congreso de la Nación Argentina un proyecto de ley en el que se establecía una especie de reciprocidad para extranjeros. Ello implica que solo serían brindados lo servicios de salud, educación seguridad social, etc. a aquellos Estados que brindaran idénticos servicios a ciudadanos argentinos en nuestro país. El revuelo mediático generado, abrió una discusión polémica en nuestro país dónde se pretendió hacer creer que Argentina no se encontraba obligado a

brindar los servicios cuando no hubiera reciprocidad, por lo cual la utilización mediática al margen de los derechos llevó a generar una conciencia colectiva en contra de los derechos humanos que no cumple con los objetivos planteados supra.

**Observatorio permanente de migrantes en la Ciudad de Río Cuarto. El reencuentro familiar de unos Venezolanos.**

A través de la articulación del Observatorio Permanente de Migrantes y el trabajo conjunto de la Defensoría se consiguió la vinculación de una familia Venezolana en nuestra ciudad. El padre de familia había migrado a Río Cuarto, desde hacía TRES meses, sin embargo su familia permanecía en Venezuela. Cuando reunió el Dinero, su familia pudo viajar sin embargo la travesía de 20 días los llevó hasta Uruguayana, una ciudad frente a Paso de los Libres, en Corrientes, que está unida por un paso internacional. La falta de pasaporte de su hijo más pequeño, de dos años, fue causal de demora. Esto se debe, según cuenta la familia, a que en Venezuela los niños hasta la edad de 10 años no tienen cédula de identidad, sino que se manejan con la partida de nacimiento o pasaporte. La falta de documentación del más pequeño de la familia impidió el trámite. Todos tenían pasaporte, menos él. La familia volvió a la terminal de ómnibus, ya con poco dinero, y llamaron a Río Cuarto para notificar la situación con la incertidumbre de no saber cómo iba a continuar todo el viaje. Ante la desesperación, Roberto, que seguía con ansiedad los movimientos, acudió al Observatorio de Migrantes, que funciona en la sede de la Defensoría del Pueblo.

Durante 48 horas, desde la Defensoría se realizó un trabajo insistente y coordinado entre distintos organismos estatales y supranacionales para gestionar el ingreso de la familia completa -que permanecía varada en la terminal de Uruguayana-. Apelando a la libertad para transitar, el derecho del niño y la importancia de revinculación familiar. El interés superior del menor -de los tres- pero en especial del pequeño que tiene problemas de salud, significó que se coordinen y arbitren los medios necesarios para que se dé la entrada al país de éste en calidad de Refugiado, en un trabajo conjunto de consulado, la Comisión Nacional para Refugiados y ante un juez federal el estatuto de refugiado. Pudiendo así encontrarse con su padre e instalarse en Río Cuarto con un certificado de residencia precaria de peticionante de refugio que deberá regularizar en enero de 2019.